

C.A. de Valdivia

Valdivia, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que por sentencia de cuatro de enero del presente año, el Juez titular del Juzgado de Letras de Los Lagos, don José Iván Milanca Sánchez, rechazó las demandas de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional, despido indirecto y cobro de prestaciones laborales, deducidas por doña Sandra Margot Aqueveque Antiñir en contra de Terciados y Elaboración de Maderas S.A. y acogió la pretensión de pago del feriado proporcional, condenando a la demandada al pago de la suma de \$195.276, más reajustes e intereses, sin costas.

En contra del indicado fallo, el abogado don Sebastián Avendaño Farfán en representación de la demandante, dedujo recurso de nulidad, invocando como causal principal la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en relación al artículo 456 del mismo cuerpo de normas, con fundamento en que se vulneró el principio de razón suficiente, al concluir que existían descansos intermitentes, en circunstancias que aquellos no están registrados, ni existe instructivo sobre pausas regulares, habida cuenta que los testigos no fueron contestes al declarar sobre la duración de los mismos, lo que descarta que el empleador hubiera cumplido diligentemente con su deber de seguridad.

Sostiene que el Juez a quo estima que el empleador cumplió con el deber de seguridad y satisfizo las necesidades de la actora, empero, pasa por alto que la enfermedad profesional tuvo su origen tres meses antes de la calificación respectiva, esto es, en el mes de enero del año recién pasado, por lo que el documento de verificación de cumplimiento aludido en la sentencia, resulta extemporáneo para tal fin, precisamente, porque se refiere a medidas adoptadas con posterioridad a la declaración de enfermedad profesional. Indica que el sentenciador tiene por acreditado el deber de seguridad, además, con medidas que no guardan relación con la patología de la demandante, según se lee en el considerando octavo.



Arguye que en la sentencia censurada se infringen las máximas de la experiencia al afirmar que la reubicación de la trabajadora en una maquina corcheteadora no lastimaba sus brazos, pues aquello implica el uso repetitivo de las extremidades superiores y, en definitiva, supuso el retiro de la actora de la empresa. Refiere que al haberse diagnosticado una patología esquelética, el empleador debió reubicar a la trabajadora en una función donde no utilizara las extremidades afectadas. Indica que el Juez del grado calificó la nueva labor como ligera, pretiriendo en su análisis que se trata de un ejercicio repetitivo.

Subsidiariamente invocó el motivo anulatorio previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación al Decreto Supremo N° 594, normas técnicas de identificación y evaluación de tmer -extremidades superiores- (MINSAL, 2011) y protocolo de vigilancia para trabajadores expuestos a factores de riesgo de tmer (MINSAL, 2012), por estimar que el Juez del grado solo aplicó el artículo 184 del Código del Trabajo, sin considerar que la trabajadora padece epicondilitis derecha y epitrocleitis izquierda y que aquella patología es de origen laboral. Añade que el aludido decreto, establece deberes específicos del empleador destinados a evitar el desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas, lo que fue omitido en la sentencia y, por ende, incurrió en una falsa aplicación de ley.

Como segundo capítulo por esta causa, estima infringidos los artículos 184 del Código Laboral y 1698 y 1547 del Código Civil, desde que invierte la carga de la prueba sin aplicar la presunción que contempla la primera norma citada. Agrega que el sentenciador liberó al empleador de probar que la reasignación de la trabajadora en las máquinas gol y corcheteadora era un trabajo apto para una persona que padece una enfermedad profesional de tipo musculoesquelética.

En definitiva, solicita por ambas causales que se acoja el recurso de nulidad y en su mérito se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en relación a la causal principal de nulidad invocada, consistente en la infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, conviene tener presente que para que ello ocurra, se requiere estar en presencia de



una alteración evidente y notoria, posible de concluir de la sola lectura del fallo impugnado, donde se aprecie que el razonamiento judicial ha vulnerado las razones jurídicas, de lógica y experiencia que conforman la sana crítica.

SEGUNDO: Que, del mismo modo, resulta útil consignar que la causal en análisis faculta al tribunal que conoce del recurso de nulidad para controlar que en el proceso de apreciación y valoración probatoria -efectuado por el tribunal a quo conforme a las reglas de la sana crítica- no se sobrepasen los parámetros de ponderación que son inherentes a dichas reglas, siendo insuficiente para anular un razonamiento, el sólo hecho de disentir del mismo.

TERCERO: Que, el Juez del grado estimó que la demandada no debe responder por la aparición de la enfermedad de la actora ni los perjuicios subsecuentes, pues los incumplimientos y negligencias imputados al empleador (en la forma descrita en la demanda), resultaron no ser efectivos, o lo que es lo mismo, concluyó que la hipótesis fáctica afirmada en la demanda no fue probada por quien tenía la carga de hacerlo.

CUARTO: Que, en el considerando 5° del fallo censurado se tuvo por acreditado que existe una decisión del comité de calificación de enfermedades profesionales de patologías músculo-esqueléticas que sostiene que ambas enfermedades referidas por la demandante tienen un origen laboral (epicondilitis derecha y epitrocleitis izquierda).

Luego agrega que, conforme a las máximas de la experiencia, las primeras molestias comenzaron a manifestarse, al menos, tres meses contados desde enero de 2022 hacia atrás y que conforme a la resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades, la dolencia apareció mientras la actora desarrollaba sus labores en la empresa demandada.

QUINTO: Que, posteriormente, el análisis de la prueba que se realiza en los considerandos sextos y siguientes de la sentencia censurada, se centra en poner de relieve la ausencia de incumplimientos, así como la conducta posterior del empleador una vez declarada la enfermedad profesional, para luego concluir que no le cabe responder por la aparición de la misma, sin embargo, la sentencia omite realizar un contraste con la información aportada por la Asociación Chilena de Seguridad, en la que



consta que la trabajadora consultó por primera vez el 24 de enero de 2022 por afectación en codo derecho, con síntomas que se manifestaron el 19 de octubre de 2021 y que de acuerdo a la opinión del comité de calificación de enfermedades profesionales de patologías músculo-esqueléticas de extremidad superior, de 22 de febrero de 2022, se calificó la enfermedad de origen laboral (epicondilitis codo derecho), pues se confirmó la exposición a agentes de riesgo (postura, repetitividad) y agentes agravantes (movimientos bruscos de los brazos) concordantes con el cuadro clínico. Luego agrega que el trabajador *“...se encuentra expuesto a una combinación de agentes de riesgo y/o agravantes/adicionales en tiempo, magnitud e intensidad suficientes como para generar patología laboral. No presenta variabilidad y alternancia de tareas/operaciones”*.

Asimismo, consta que el 22 de marzo de 2022, la trabajadora concurrió hasta la Asociación Chilena de Seguridad relatando que *“desde hace 4 meses con molestias en su codo izquierdo y hace aproximadamente 1 mes con dolor más agudizado. eva 8/10, asociado a impotencia funcional e irradiación hacia su antebrazo ipsilateral”*. En dicha oportunidad se consignó que *“tiene que armar cajas que vienen dobladas, son de cartón”* y que *“recomiendo investigar puestos de trabajo previos, ya que actual no impresiona para producir enfermedad profesional”*.

Luego de requerir antecedentes para decidir, el comité de calificación de enfermedades profesionales de patologías músculo-esqueléticas de extremidad superior, por resolución de 19 de abril de 2022, calificó la enfermedad de origen laboral (epitrocleititis izquierda), pues se confirmó la exposición a agentes de riesgo (postura, repetitividad, falta de periodos de recuperación suficiente o descanso) y factores adicionales (agarre de elementos) concordantes con el cuadro clínico.

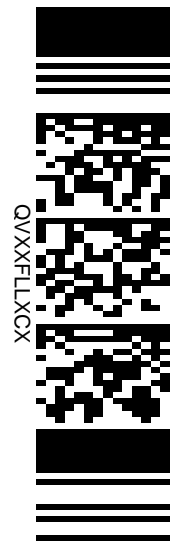
SEXTO: Que, asentado lo anterior, resulta útil consignar que la responsabilidad contractual del empleador por enfermedad profesional se construye a partir del artículo 184 del Código del Trabajo, que establece una obligación de seguridad cuyo criterio de imputación es subjetivo, es decir, se trata de una exigencia impuesta al empleador que no se limita a contemplar medidas de seguridad de cualquier naturaleza, sino a que éstas sean efectivas en el cumplimiento del objetivo de proteger la vida y seguridad de los trabajadores, lo que apunta a desarrollar en forma celosa la actividad



orientada a ese fin y obliga, de alguna manera, a evaluarla por sus resultados, pues la palabra “eficazmente” apunta en dicho sentido, además, de la magnitud de responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad, en relación con lo cual cabe inferir inequívocamente una suma exigencia del legislador y los valores que tienden a preservar la obligación de seguridad, en forma directa e inmediata, no son de índole patrimonial, sino es propia vida, la integridad física y psíquica, y la salud del trabajador.

Así, el empleador se constituye en deudor de seguridad de sus trabajadores, lo cual importa exigir la adopción de todas las medidas correctas y eficientes, destinadas a proteger la vida y salud de aquellos y que el citado precepto establece el deber general de protección de la vida y salud de sus trabajadores, impuesto por la ley a los empleadores, siendo el cumplimiento cabal e íntegro de esta obligación de una trascendencia superior a la de una simple prestación a que se somete una de las partes en una convención, y evidentemente un principio incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público, entre otras, la Ley N° 16.744; Decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo; norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT); y protocolo de vigilancia para trabajadores expuesto a factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores relacionados con el trabajo, regulaciones estas últimas que incluyen como factores de riesgo asociados a trastornos musculoesqueléticos la repetitividad y postura forzada observados por la Asociación Chilena de Seguridad.

SÉPTIMO: Que, en concordancia con lo expuesto, los artículos 1698 y 1547 del Código Civil ponen de cargo del empleador acreditar que ha cumplido con este deber legal de cuidado, si la enfermedad profesional ha ocurrido dentro del ámbito de actividades que están bajo su control,



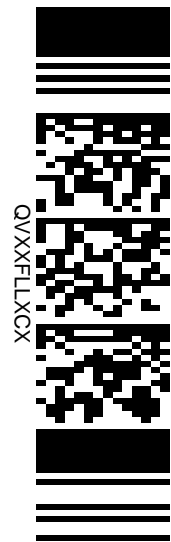
precisamente, porque corresponde probar la diligencia o cuidado a quien ha debido emplearlo.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, la conclusión a la que arribó el Juez del grado se sustenta en un análisis parcial de la prueba rendida y, por ende, dicha omisión resulta contraria al mandato del artículo 456 del Código del Trabajo, pues no se hace cargo de la exposición de la trabajadora a los agentes de riesgo, al menos, desde el inicio de los síntomas.

En efecto, dado que el empleador tiene la obligación de proteger eficazmente la vida del trabajador, ello supone que debe adoptar medidas idóneas para evitar exponerlo a riesgos que puedan derivar en una enfermedad de origen laboral. Luego, si los síntomas de la enfermedad profesional se manifestaron mientras prestaba servicios para la empresa demandada, entonces la prueba del empleador ha debido encaminarse a acreditar que en dicho periodo adoptó las medidas pertinentes para tal fin, es decir, la demandada debía probar qué medidas adoptó *ex ante* para evitar tal afectación, lo que no ocurrió, pues el documento denominado “Verificación de Medidas Organismo Administrador”, se refiere a las medidas adoptadas por el empleador luego de la calificación de enfermedad profesional (febrero y abril de 2022); la inspección personal del tribunal solo es útil para constatar hechos actuales, mas no permite inferir medidas de seguridad pasadas; las declaraciones de los testigos respecto a la realización de pausas no permiten obviar la existencia de agentes de riesgo, agentes agravantes y factores adicionales que pone de manifiesto la Asociación Chilena de Seguridad; mientras que las obligación de informar, capacitaciones y entrega de elementos de protección personal enumeradas en el considerando octavo, no dicen relación con trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores.

Por otro lado, se observa que el Juez a quo en vez de exigir a la demandada la prueba idónea del cumplimiento de su obligación de asegurar eficazmente la vida de uno de sus trabajadores, traspasó dicho peso procesal a la demandante en orden a que ésta demostrara los incumplimientos alegados en la demanda.

NOVENO: Que, así las cosas, las conclusiones a las que arriba el sentenciador no se siguen lógicamente de las premisas sobre las que



parte, pues afirma que el empleador no debe responder por la aparición de las enfermedades profesionales que se originaron mientras la actora desarrollaba sus labores en la empresa demandada, y al mismo tiempo, pasa por alto la carga de probar el cumplimiento del deber de seguridad que pesa sobre el mismo, en el tiempo en que se manifestaron los síntomas de la enfermedad.

En síntesis, no es posible -sin incurrir en una contradicción lógica- afirmar la conclusión y negar las premisas.

DÉCIMO: Que, tal como se ha venido razonando, el juez a quo omitió valorar prueba relevante para la decisión de la controversia e incurrió en contradicciones lógicas al fundamentar sus conclusiones, lo que constituye infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

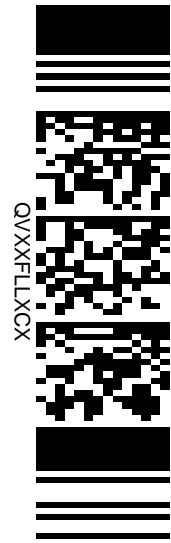
Por consiguiente, el razonamiento judicial vulneró las razones simplemente lógicas y no consideró la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso.

UNDÉCIMO: Que, si bien los jueces de la instancia son soberanos para determinar los hechos asentados conforme a la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, no procede aceptar que en tal análisis se prescinda de las bases de convicción social que están llamados a respetar.

DUODÉCIMO: Que, observándose en la dictación de la sentencia la falla que el recurso de nulidad le atribuye, el presente arbitrio de nulidad será acogido, dictándose sentencia de remplazo.

Atendido el acogimiento de la causal en análisis, innecesario resulta pronunciarse sobre el motivo anulatorio invocado en forma subsidiaria.

Por lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto por el artículo 482 del Código de Trabajo, se **ACOGE**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Sebastián Avendaño Farfán en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil veintitrés, emanada del Juzgado de Letras de Los Lagos, la que es nula, procediéndose a continuación y separadamente a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo.



Acordado contra el parecer del Abogado Integrante Sr. Claudio Aravena Bustos, quien fue de opinión de rechazar el recurso deducido, toda vez que la causal, de la forma plantada es inconducente para alterar lo resuelto en el fallo de primera instancia. Sentencia que además no adolece de vicio alguno.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

N° Laboral - Cobranza-36-2023.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Valdivia, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia recurrida de cuatro de enero de dos mil veintitrés, con excepción de los basamentos sexto a décimo, que se eliminan.

Y TENIENDO EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo razonado en los motivos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la sentencia de nulidad que antecede y que se dan por reproducidos, estando acreditado que la enfermedad profesional tuvo lugar por la exposición de la trabajadora a factores de riesgo mientras prestó servicios para la demandada, correspondía que el empleador justificara la adopción de medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de la actora, lo que no ocurrió.

SEGUNDO: Que, acorde a lo razonado respecto del deber de protección del empleador, con los hechos asentados y la información aportada por la Asociación Chilena de Seguridad, cabe concluir que la empresa demandada fue negligente al exponer a la actora a agentes de riesgo que culminaron con que padeciera dos enfermedades de origen laboral.

TERCERO: Que, para apreciar el daño moral soportado por la demandante, se tiene presente -especialmente- la información médica de la Asociación Chilena de Seguridad que señala que la trabajadora tiene 56 años de edad, que padece epitrocleitis izquierda y epicondilitis codo derecho,



lo que provoca dolor intenso bilateral y que la afecta en las actividades que realiza (limitación de funcionamiento). Lo anterior, supuso tratamientos de diversos tipos, al menos, hasta el 9 de noviembre de 2022, según se infiere de los controles y ficha clínica que rolan en autos, sin que se haya acreditado un porcentaje de incapacidad específico.

A su turno, de las declaraciones de los testigos de la demandante, se desprende una situación de desmedro en su estado de salud físico y emocional, así como dolor e incomodidad en el quehacer diario, lo que, además, aparece corroborado con el “estado de ánimo bajo” manifestado en los controles médicos realizados en la Asociación Chilena de Seguridad.

CUARTO: Que, apreciada la prueba descrita precedentemente conforme a las reglas de la sana crítica, es posible concluir que la actora sufrió un daño moral que comprende dos dimensiones, en primer lugar, el proveniente de la enfermedad profesional, su evolución, tratamiento y el dolor que padece; y, en segundo término, el daño psíquico que aquello supone, al verse disminuidas sus condiciones de vida y laborales.

Todo lo anterior, lleva a esta Corte a estimar que la actora tiene derecho a ser indemnizada por tales perjuicios, con una suma que fijará prudencialmente en \$ 3.000.000.- (tres millones de pesos)

QUINTO: Que, en cuanto al despido indirecto, este se hizo consistir en la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, al haberse diagnosticado dos enfermedades profesionales que encuentran su origen mientras se desempeñaba como dependiente de la demandada.

Al estar acreditada tal afirmación fáctica, corresponde declarar justificado el despido indirecto y condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones solicitadas.

SEXTO: Que, la remuneración que debe servir de base al cálculo de las prestaciones que se reclaman asciende a la suma de \$633.328, en virtud de lo dispuesto en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, pues la demandada no controvertió específicamente tal monto al contestar, habida consideración que aquello, además, es concordante con los comprobantes liquidaciones de remuneración de la demandante y los certificados de cotizaciones rendidos en juicio.



En consecuencia, ésta será la remuneración que se considere para el cálculo de las prestaciones que se reclaman.

SÉPTIMO: Que, frente a la justificación del despido indirecto, el empleador debe pagar una indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de \$633.328, conforme lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, estando acreditada la extensión de la relación laboral (15 de enero de 2018 a 20 de mayo de 2022), se condenará al empleador al pago de una indemnización por 4 años de servicio por la suma \$2.533.312, al tenor del artículo 163 del Código del Trabajo, a la que se aplicará el incremento previsto en el artículo 168 del mismo código (\$1.266.656), tal como fuera pedido en la demanda.

NOVENO: Que, al no haberse controvertido el monto demandado por concepto de feriado proporcional (\$195.276), ya que solo se afirmó que en caso de existir una suma adeudada por tal concepto, sería pagada, cabe acoger lo reclamado conforme lo dispuesto en el artículo 453 N° 1 del Código Laboral.

Por lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 41, 63, 161, 162, 163, 168, 171, 453 y 456 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que, se **ACOGE** la demanda deducida por doña Sandra Margot Aqueveque Antiñir en contra de Terciados y Elaboración de Maderas S.A., declarándose justificado el despido indirecto de fecha 20 de mayo de 2022 y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de las siguientes sumas:

- a) \$ 3.000.000 por concepto de daño moral por enfermedad profesional.
- b) \$2.533.312 a título indemnización por años de servicios.
- c) \$633.328 por indemnización sustitutiva de aviso previo.
- d) \$1.266.656 correspondiente al recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio.
- e) \$195.276 por pago de feriado proporcional adeudado.

II.- Que, las sumas ordenadas pagar lo son con intereses y reajustes, de acuerdo a lo ordenado en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.



III.- Que, no se condena en costas a la parte demandada, por no resultar totalmente vencida.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Nº Laboral - Cobranza-36-2023.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada por Ministra Marcia Del Carmen Undurraga J., Fiscal Judicial Paola Carolina Oltra S. y Abogado Integrante Claudio Eugenio Aravena B. Valdivia, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

En Valdivia, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

